

La investigación arqueológica en el marco universitario: modelos *versus* realidad

Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco J. Jover Maestre
Alberto J. Lorrio Alvarado

El contexto y los modelos

La universidad española está en crisis, y no es que esté en crisis por el proceso de adaptación hacia un nuevo modelo que tiene como marco de referencia el Espacio Europeo de Educación Superior —a partir de ahora EEES—. Está en crisis, desde nuestra perspectiva, porque se encuentra en una encrucijada de difícil resolución. La universidad tiene encomendada una doble misión: una labor formativa cada vez más compleja y exigente, en paralelo a la tarea específica de investigar y generar nuevos conocimientos que mejoren la sociedad. Pero en un mundo cada vez más competitivo, en un país que infrafinancia la investigación y con enormes dificultades para conseguirla en Europa —donde a menudo nuestra investigación arqueológica se considera “local”—, seguir ejerciendo esta labor a tiempo parcial, al 50% del tiempo o menos, no resulta una actividad regida por los principios de eficacia y racionalidad. Ni tampoco parece ser lo más adecuado si tenemos en cuenta que en los países anglosajones la separación entre docentes e investigadores, más que una tendencia es una realidad desde hace muchos años; una realidad que, ayudada por una injustificada exclusividad lingüística, les está reportando importantes éxitos y una clara preeminencia en el acceso a recursos y medios materiales para desarrollarla. Por esta razón, cuando en la sección de *Debats* de esta revista se nos invitaba a reflexionar sobre la proyección de la investigación y los institutos de investigación en la universidad española y sobre el modelo universitario hacia el que deberíamos dirigirnos, nos pareció obligado comenzar por plantear una primera cuestión que subyace en el contexto actual: ¿para conseguir una enseñanza de calidad y, a la vez, ser competitivos en investigación, se debe tender hacia un modelo que separe claramente entre un cuerpo o perfil de docentes no investigadores y otro de investigadores o, por el contrario, urge racionalizar y reconducir esta tendencia?

A tenor de lo expuesto y en respuesta a esta cuestión, podría parecer que lo más eficiente y rentable sería implantar un modelo de funcionamiento en esta línea, con una nítida separación de labores —docentes por un lado e investigadoras por otro—,

a pesar de las reticencias que surgen en este sentido en el nutrido grupo de investigadores-docentes universitarios, entre los que nos incluimos. En ese escenario ficticio, que como veremos a continuación no es tan “imaginario” como se pretende, cada cuerpo de profesionales —docentes e investigadores—, debidamente formados y preparados específicamente, se dedicaría con plenitud de esfuerzos —cada vez más exigentes— hacia cada uno de los objetivos trazados, buscando una sinergia de intereses hacia la mejor y más completa formación de los estudiantes que podrían elegir y dirigir su trayectoria formativa, o bien hacia un perfil docente o bien investigador.

En cierto modo esa dicotomía ya existía en el Estado español, materializándose en la dualidad de los organismos que tienen reconocida la capacidad investigadora: investigación en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones científicas)¹ e investigación más docencia en las universidades. Un escenario mimetizado a escala y con aparente éxito en otros ámbitos territoriales, como Cataluña, donde el ICREA (Institut Català de Recerca i Estudis Avançats)² acoge una escala científica específica extrauniversitaria, con plazas permanentes de profesores de investigación en el sistema de investigación catalán y una peculiaridad específica destinada precisamente a aumentar el impacto y la proyección internacional de la investigación universitaria —la convocatoria ICREA Academia desde 2007—, y el País Vasco donde el Gobierno vasco creó en 2007 el programa Ikerbasque —Fundación Vasca para la Ciencia—³ con la misma finalidad de captar de forma permanente, o por amplios periodos, a investigadores de excelencia, que se incorporan a una escala puramente investigadora, que no existe en otras comunidades autónomas. Es indudable que esa dualidad entre centros únicamente investigadores y centros investigadores a la par que docentes, con escalas profesionales que aplican —al menos en el sistema nacional de reconocimiento de sexenios CNEAI— parámetros de evaluación similares entre profesores universitarios y profesores de investigación en sus diversas escalas, a pesar de la desigual disponibilidad en dedicación y recursos existente, genera numerosas disfunciones y lastra enormemente la investigación universitaria.

1. Creado en 1939 a partir de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) de 1907, el CSIC tiene como misión “el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia”, según el artículo 4 de su Estatuto. <<http://www.csic.es/presentacion>> (consultado 28/10/2017).

2. Fundación financiada por el gobierno catalán que nació en 2001 “com a resposta a la necessitat de noves fórmules de contractació que permetessin competir en condicions d'igualtat amb altres sistemes de recerca, orientada a la contractació exclusiva del personal científic i acadèmic més extraordinari i amb més talent.” <<https://www.icrea.cat/ca/qui-som>> (consultado 28/10/2017).

3. <<http://www.ikerbasque.net/es/sobre-nosotros>> (consultado 28/10/2017).

La realidad

En consecuencia, la realidad se impone y a nadie debe extrañar que los docentes no investigadores —o al menos con un perfil investigador bajo— sean ya una realidad en la universidad española, no porque quieran —o al menos eso cabe pensar en muchos casos—, sino por ausencia de las condiciones adecuadas para emprender dicha actividad. Tampoco resulta sorprendente decir que buena parte de los que siguen investigando en el medio universitario, lo hacen a costa de innumerables sobreesfuerzos y sacrificios, con muy limitadas condiciones materiales y de financiación, donde la amistad y el voluntarismo siguen jugando un papel destacado, al menos en lo que a la praxis arqueológica se refiere. Esta situación, vigente desde hace más de una década, es el resultado de varios factores entre los que merecen destacarse las condiciones históricas bajo las que se ha ido configurando el mapa de universidades y de titulaciones; las consecuencias y exigencias a coste cero de la integración en el EEES; y, evidentemente, las consecuencias de la situación coyuntural de la última década, con sus reformas.

La universidad como institución social ha cumplido históricamente un papel esencial en la transmisión del conocimiento, en la formación de nuevas generaciones en diferentes ramas del conocimiento y, cómo no, en la investigación y consecuentemente en la generación de nuevos conocimientos. Las universidades —aunque existen variaciones según época y lugar— han organizado sus estudios en distintos niveles o escalas, básicamente mediante facultades, escuelas, colegios, departamentos o áreas de conocimiento, pero también a través de centros de investigación donde la concatación entre docencia e investigación ha sido siempre la clave del edificio. Con el nuevo ordenamiento jurídico del Estado español se fue gestando un creciente optimismo social, en ocasiones casi desmesurado, que sirvió para proyectar como objetivo la consecución de la denominada “sociedad del bienestar”. La puesta en marcha de este proyecto político en la década de 1980 tuvo dos pilares esenciales: democratizar y universalizar la salud pública, por un lado, y la educación y la cultura, por otro. Así, en ambas esferas no tardaron en materializarse los esfuerzos, y en el caso concreto de la educación superior, el resultado fue obvio: la multiplicación del número de universidades y/o facultades y estudios. La universidad, que había estado restringida prioritariamente a las élites, debía dar cobertura a toda la población y acercarse a los ciudadanos. La división administrativa y territorial en provincias fijadas en 1833 —y no en comunidades autónomas a las que se haría transferencia de las competencias en educación—, fue la cartografía esencial sobre la que se sustentó la implantación de nuevas universidades, sin valorar realmente la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. El reparto de las competencias a las comunidades autónomas tampoco favoreció el desarrollo de un mapa común de titulaciones racional y sensato desde una perspectiva estatal en atención a diversos factores de importancia —recursos materiales, económicos, población, etc.—, sino que, más bien al contrario,

favoreció la duplicidad de centros y titulaciones en territorios muy próximos. Más que “universidad para el pueblo” se trataba de “universidades para todas las provincias”, sin tener en cuenta los costes y que la universidad también es un centro de investigación que requiere de una financiación específica. De este modo, se crearon en España casi tantas universidades como provincias e incluso en algunos casos —como si de proyectos presidencialistas se tratara— más de una. Al tiempo, en algunas universidades se creaban centros o institutos de investigación con la intención de potenciar específicamente algunas líneas preferentes de investigación, aprovechando la masa crítica existente o la capacidad de liderazgo de algún grupo de investigación. No fue este inicialmente el caso de la arqueología.

En este contexto de progreso social y cultural se forjó el perfil vigente de profesorado universitario, cuya dedicación se repartía por igual —en teoría— entre labores docentes e investigadoras, incluyendo la gestión docente, la representación institucional y la gestión de la investigación a través de proyectos públicos y privados. Auténticos “malabaristas”, que en aquellos momentos todavía no estaban continuamente evaluados, ni a nivel docente ni investigador, como sí ocurre en la actualidad desde la implantación del EEES y del ‘decreto Wert’. Este último factor ha contribuido a agrandar aún más la brecha entre investigadores y docentes universitarios, al convertir los criterios de valoración de productividad investigadora —los sexenios, hasta entonces complementos económicos y de reconocimiento académico— que se aplican por igual y sin distinción, a profesores universitarios con docencia y gestión de la docencia y a profesores de Investigación del CSIC o las fundaciones autonómicas para la Ciencia, en instrumentos de control de productividad, transformando la “docencia” en un castigo. En otras palabras, a menos investigación, medida en sexenios obtenidos, un profesor universitario debe asumir mayor carga docente —que le aboca a un círculo vicioso en el que cada vez puede investigar menos—; mientras que los profesores de investigación, captados o consolidados por su talento o capacidad dinamizadora pero igualmente permanentes en sus condiciones laborales, no son penalizados si no cumplen con los requisitos de productividad investigadora —los mismos, pese a tener un 100% de capacidad investigadora— y no obtienen un sexenio en plazo y forma. La realidad conduce ineludiblemente a un modelo de “universidad laboral” con docentes que forman para el empleo, mientras la investigación se desliza subrepticamente a ambientes donde la docencia es testimonial. Y este camino que separa innovación y pensamiento crítico de enseñanza universitaria no es en absoluto inocente.

Por otro lado, la integración de España en la Unión Europea obligó a asumir un nuevo modelo a partir de la década de 1990, cuyas directrices en materia de educación superior se fueron configurando en diversas convenciones y acuerdos establecidos en distintas ciudades europeas. Se aprobaba así la inclusión de la universidad española en el EEES, no solo para normalizar un marco mínimo y común para la obtención de titulaciones de reconocimiento europeo,

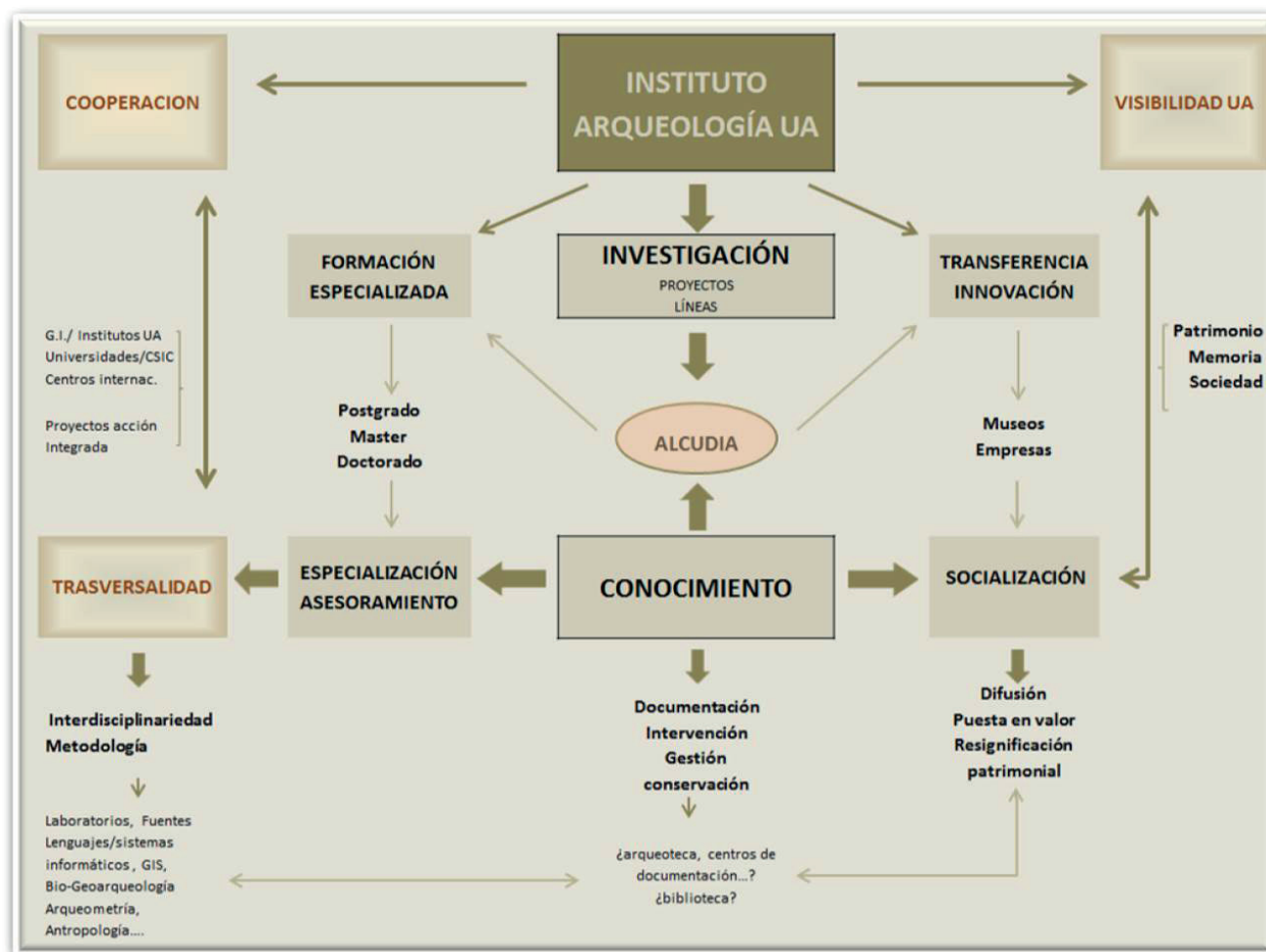


Figura 1. Esquema conceptual sobre los campos de acción del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante - INAPH.

sino también de progresiva mejora de la calidad de la enseñanza y de las ofertas formativas, verificado y acreditado a través de sistemas de control y de procesos periódicos de evaluación. La continuidad y la sostenibilidad de planes de estudios y de universidades dejaron de estar garantizadas a priori, en un nuevo marco en el que los discentes comenzaron a considerarse “clientes” en lugar de estudiantes y los docentes formadores para el empleo antes que transmisores de conocimiento y pensamiento crítico. Desde esta nueva perspectiva, solo serían viables aquellas universidades competitivas con relación al cumplimiento de una serie de parámetros establecidos desde el ámbito empresarial —desarrollo de proyectos de interés empresarial, liderazgo, emprendimiento, captación de financiación, visibilidad social, etc.—. Esta situación no ha hecho más que acrecentar la competitividad entre universidades en detrimento de la competencia, con el objetivo básico de conseguir su sostenibilidad en unos casos y, en otros, de buscar la denominada excelencia al objeto de obtener mayores fuentes de financiación. En esta coyuntura de creación de una política científica nacional propia se enmarca la creación del ICREA en 2001, con la finalidad de contratar a un destacado cuerpo de investigadores de talento y vincularlos a los centros de investigación y universidades catalanas, lograr un mejor posicionamiento en los *rankings* de evaluación y conseguir

mejores y mayores dotaciones. Es innegable que la política desarrollada en este sentido por la Generalitat de Catalunya ha sido muy exitosa en resultados de investigación y fondos obtenidos, igual que la vasca, con respecto al resto del territorio español, si bien conviene también recordar que en ambos casos han duplicado las posibilidades de financiación pública de la investigación, constreñida en el resto del Estado español exclusivamente al Plan Nacional de I+D+i y a las cada vez más evanescentes o directamente inexistentes convocatorias autonómicas durante la última década.

Frente a ello, otra de las medidas adoptadas por las universidades ha sido la creación de institutos universitarios de investigación —también en la arqueología, aunque en menor número—, como forma de concentrar, coordinar esfuerzos y aunar sinergias de investigadores y grupos de investigación en pocas líneas de investigación, socialmente necesarias, que puedan ser competitivas. De este modo, en las últimas décadas han sido creados en distintas universidades, y no por casualidad de forma prioritaria en Cataluña, algunos institutos de investigación en materia arqueológica —CEPAP en la UAB; ICAC e IPHES en la Universidad Rovira i Virgili; Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria; Centro Andaluz de Arqueología Ibérica en la Universidad de Jaén, entre otros—. En concreto, un reducido número

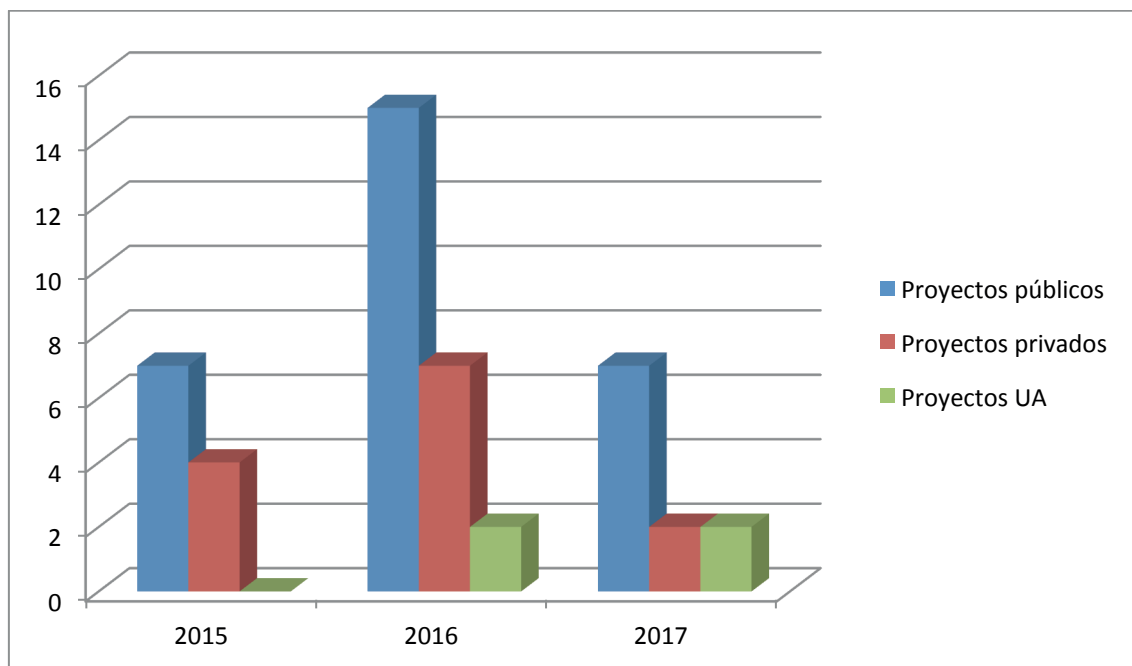


Figura 2. Número —en valores absolutos— y tipología de proyectos gestionados en el INAPH desde su creación.

de institutos con unas líneas de investigación muy definidas, a los que desde septiembre de 2014 —Decreto 149/2014 de 19 de septiembre del Consell de la Generalitat Valenciana— debemos añadir el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico —INAPH⁴— en la Universidad de Alicante (figura 1), con el fin de fomentar la investigación arqueológica del patrimonio histórico desde una perspectiva global, integrando a dos grupos de investigación consolidados —Prehistoria y Protohistoria y Arqueología y Patrimonio Histórico—, junto a especialistas de otras áreas de conocimiento como la Historia, la Arquitectura, la Antropología física, la Filología, la Biotecnología, el Derecho, la Geografía, el Turismo y la Economía.

En este último caso que nos atañe, como en la mayoría de los institutos universitarios, la creación de un instituto no supone sino un marco institucional sinérgico que no lleva aparejada una financiación científica comparable a la que se ha producido en el modelo vasco o catalán. Más allá de la financiación básica de gestión, similar a la de un departamento universitario, el instituto solo amalgama y gestiona los recursos propios de los investigadores y grupos de investigación adscritos derivados de los proyectos públicos, privados y propios (figura 2) y de las tesis dirigidas o complementos investigadores propios.

La pertenencia a un instituto universitario no supone en ningún caso un reconocimiento en descarga docente en beneficio de la investigación para sus miembros, ni tan siquiera en el caso de los cargos personales de dirección que, en el mejor de los casos, ven reducida su carga docente al 50% de la estipulada por la universidad, que en el caso de la de Alicante nunca puede ser inferior a 11 créditos.

Su creación tampoco lleva aparejada una escala profesional científica y, al menos en el caso de nuestra universidad y a diferencia de otras, debe hacerse cargo de la financiación o cofinanciación de los becarios postdoctorales, contratados Juan de la Cierva o Ramón y Cajal, así como de cualquier otra figura contractual de la Ley de la Ciencia, de sus propios fondos. Es más, después de tres años de activa existencia las promesas de la universidad de dotarnos de espacios adecuados —despachos, seminarios, laboratorio, etc.— todavía no se han cumplido.

Ahora bien, la implantación del EEES ha supuesto, entre otras consecuencias, un profundo cambio en los planes de estudios, con una drástica reducción del número de créditos de determinadas áreas de conocimiento —en especial en los ámbitos históricos y humanísticos a los que se suele adscribir la arqueología en el ámbito europeo no anglosajón—, sin que se haya modificado el paradigma clásico de “a mayor número de créditos, mayores posibilidades de contar con docentes-investigadores y de crear/consolidar grupos de investigación potentes y a la inversa”. Problema que adquiere tintes dramáticos cuando plantillas envejecidas han visto cercenada, en el marco de la crisis, la tasa lógica de reposición y la política de las universidades sigue siendo la de abusar de la figura del profesor asociado, evitando la consolidación de plantillas estables. En general, predomina una universidad envejecida que no puede absorber la masa crítica formada en el sistema público español y europeo que desea volver, y en consecuencia incapaz de garantizar el relevo generacional del conocimiento, ni de captar, o peor aún, estabilizar los talentos captados. Una universidad pública mal financiada, cercada por las universidades privadas crecidas al albur de lo público, y donde la investigación es a menudo un compromiso personal y un esfuerzo colosal.

4. <<https://inaph.ua.es/>> (Consultado el 28/10/2017).

Así, muy pocas universidades españolas, aquellas que contaban con una amplia masa crítica o que tuvieron la posibilidad de desarrollar una titulación interuniversitaria, pudieron aprovechar la coyuntura para crear un grado en Arqueología; y casi en las mismas, de ofertar, además, un máster. No por casualidad, y con alguna excepción, es en estas mismas universidades donde coincide la oferta de estudios en arqueología, con la creación de institutos universitarios de investigación.

Y, por si fuera poco, la situación ha empeorado ostensiblemente desde la crisis económica iniciada en 2007-2008. Entre otras cuestiones, se ha producido un descenso evidente en el número de estudiantes de primera matrícula por el incremento de las tasas, tanto en grado como en máster; muchas facultades han tenido que afrontar reestructuraciones de estudios y uniones departamentales de graves consecuencias para el desarrollo de la investigación; han aumentado las cargas burocráticas del profesorado con la implantación de los sistemas internos de garantía de calidad, además del esfuerzo de adaptación docente a las nuevas modalidades organizativas y uso de TICS; se han precarizado las plantillas y en consecuencia se han reducido las posibilidades de obtener proyectos de investigación, cada vez peor dotados. Sin olvidar que la presión ejercida sobre los profesores universitarios para acreditar una investigación puntera no redunda necesariamente en una mejora docente y produce a menudo un daño colateral: la desmotivación investigadora y docente. A esta situación general cabe añadir, al menos desde nuestro punto de vista, otros tres elementos que han aumentado las dificultades para investigar en arqueología:

1. La práctica arqueológica es una actividad investigadora cuyos costes se han ido incrementando de forma exponencial en los últimos años. Ya no solo por lo que supone contar con amplios equipos de trabajo de prospección o de excavación, sino por la necesidad de invertir cada vez más en una amplia y variada gama de analíticas, sin las cuales los resultados obtenidos carecen de los estándares científicos que hoy se exige a una investigación puntera.

2. La necesidad de equipos interdisciplinares cada vez más numerosos y difíciles de aunar bajo unos intereses comunes, donde primen los estudios históricos, arqueológicos o patrimoniales, sobre todo, si lo que se pretende es conseguir buenos resultados de investigación histórica y difundir nuestros resultados en publicaciones de impacto.

3. La imposibilidad de consolidar equipos capaces de investigar sinérgicamente y aumentar exponencialmente los resultados investigadores y en consecuencia captar recursos.

Por lo pronto, al menos en el campo de la investigación arqueológica ya se detectan significativas diferencias entre comunidades autónomas, instituciones y resultados de investigación. La política catalana, iniciada hace ya tres lustros —y lo mismo cabría decir del caso vasco— ha situado a algunas de sus instituciones en una posición de ventaja sobre el resto de comunidades autónomas, donde no se ha producido una situación similar —ni parece que se considere un

tema prioritario a corto y medio plazo—, a pesar de su evidente repercusión en aspectos tan destacados como la mejora en los *rankings* de evaluación o la obtención de mejores y mayores dotaciones, lo que en última instancia redunda en el mayor prestigio de las instituciones que han optado por esa vía. Por su parte, la creación de institutos universitarios de investigación en materia arqueológica ha permitido afianzar las posibilidades de investigación, y, por extensión, mantener una oferta formativa en estudios arqueológicos.

Con todo, y sin ánimo de ser pesimistas, creemos que en muchas universidades con grados en Historia o Humanidades, los contenidos en materia arqueológica se reducirán todavía más, en clara correspondencia con la reducción de las plantillas docentes. Como consecuencia, los estudiantes que quieran formarse en arqueología acabarán desplazándose a aquellos centros nacionales o internacionales con una oferta formativa atractiva, variada y con condiciones para el desarrollo de la investigación. Es posible que, en unos años, los estudios en arqueología queden reducidos a unas pocas universidades, probablemente, en aquellas que hayan apostado por una específica y amplia oferta formativa en arqueología y patrimonio y, a su vez, apuesten por la investigación, probablemente, a través de institutos desde los que canalizar líneas preferentes de investigación. Por esta razón la creación de institutos universitarios de investigación de orientación arqueológica es probablemente el vehículo que, en estos momentos, puede facilitar y posibilitar el desarrollo de las labores de investigación encomendadas a los docentes —siempre que así se pretenda— e, impedir la reducción e incluso, la desaparición de los estudios y las investigaciones en arqueología en muchas universidades españolas.

¿El futuro?

Ahora solo falta conocer si nuestras autoridades están pensando en apostar por un modelo donde se materialice la separación oficial entre docentes universitarios no investigadores —con las nefastas consecuencias que se prevén para la formación y el sentido de las universidades— e investigadores a tiempo completo; o simplemente se apueste por incorporar a las universidades un cuerpo específico de investigadores a tiempo completo, siguiendo el modelo ICREA en Cataluña. Quizá quepa pensar en un modelo flexible que, manteniendo la docencia como vehículo de inserción en la realidad social y sin renunciar al carácter de vanguardia que han de tener los centros de enseñanza superior, prevea y facilite la permeabilidad entre ambos universos —docente e investigador—, no “castigando” con docencia a quien no investiga, sino premiando al docente investigador; es decir, facilitándole el tiempo y los recursos necesarios para liderar equipos y proyectos punteros en el marco de institutos de investigación universitarios, que significa “investigar en y para la universidad” y no al margen de ella. Por el momento y desde hace años, el inmovilismo parece ser la mejor solución para quienes nos dirigen, mientras se corre el ries-

go —por desgracia cada día más próximo— de que la investigación universitaria sea pronto un recuerdo comparable al *Trivium et Quadrivium*.

Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco J. Jover Maestre
Alberto J. Lorrio Alvarado

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) — Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina. Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig
inaph@ua.es

L'arqueologia com a exemple de la progressiva deslocalització de la recerca o la (buscada) mort del professorat universitari

Josep M. Fullola Pericot

El debat que se'ns planteja no pot ser més candent ni més actual i incideix directament en el model de recerca, essencialment aplicada a l'arqueologia, que volem per al país.

Tampoc no hem d'amagar que les persones que participem en el debat venim condicionades pel nostre lloc de treball, per la dinàmica en la qual ens hem vist immersos en les darreres dècades, intentant fer avançar la recerca (arqueològica) des de la nostra institució.

A casa nostra hi havia hagut instituts dedicats a la recerca arqueològica des de principis dels anys seixanta, i en institucions força diferents. Recordem només l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona, fundat per Joan Maluquer de Motes i Lluís Pericot el 1959 i que es declarà continuador de l'escola arqueològica barcelonina; i l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, amb seu al Museu d'Arqueologia de Barcelona, fundat per Eduard Ripoll també el 1959, i que es declarà, per la seva banda, continuador de la tasca del Servei d'Investigacions Arqueològiques d'abans de la guerra. Altres instituts havien dedicat part dels seus esforços al tema arqueològic, com l'IEI o l'Institut d'Estudis Gironins, entre d'altres de caràcter més local.

Però aquest model va anar desapareixent al llarg dels vuitanta, o va quedar constrenyit a vestigis residuals pel que fa a la recerca arqueològica.

L'arribada de la Generalitat, amb competències en arqueologia des del 1981, no va suposar cap canvi en les estructures de recerca arqueològica. Es donaven permisos d'excavació (que no programes) a diverses institucions com universitats, museus i serveis municipals o provincials. La llavors existent Direcció General de Recerca mai no va convocar programes específics d'arqueologia durant les dues dècades finals del segle xx. Hem d'esperar-nos fins al 2006, amb l'efímer programa EXCAVA, per trobar una programació concreta del nostre camp. Des del Servei d'Arqueologia es comença a posar una mica d'ordenació a mitjà termini des del 1995, quan apareixen les programacions triennals (1995-1997), quadriennals (1998-2001 o 2014-2017) o sexennals (2002-2007 i 2008-2013).

La creació d'un comissariat d'Universitats i Recerca el 2001 va fer concebre certes esperances, en veure juntes, en el títol de l'organisme, les dues realitats que sempre havien anat de la mà, de manera prou profitosa. L'aparició del fenomen ICREA, que volia insuflar força addicional als grups de recerca, fou molt positiva per a les universitats amb grups de recerca potents.

Però, de manera paral·lela, Mas Colell es va treure de la màniga la figura dels instituts de recerca i, en certa manera, la contraposà als grups d'investigadors universitaris. Cert és que la majoria dels nous instituts de la Generalitat estan vinculats a alguna universitat, però el seu funcionament intern és totalment autònom, amb finançament procedent de la mateixa Generalitat i d'institucions locals, comarcals o provincials.

Hom no dubta de les bones intencions de centralitzar la recerca arqueològica del país en dos instituts (el Consorci ICAC i la Fundació I[C]PHES), als quals després s'afegirien l'ICP i l'ICRPC, centrats aquests dos darrers bàsicament en temes de paleontologia i patrimoni respectivament. Tanmateix el cert és que l'ascens dels instituts concideix, dramàticament, amb el menysteniment que les universitats patim, en recursos i en places, des de mitjan la primera dècada del segle xxi, i la balança s'ha inclinat, i segueix inclinant-se, de la banda dels primers.

No és objectiu d'aquestes línies criticar una cosa per potenciar-ne una altra. La trajectòria dels instituts esmentats és ben diferent, des dels que estan dedicats amb preferència a les publicacions d'articles d'impacte fins als que tenen col·leccions pròpies de llibres, passant pels que van fent el que els permeten les circumstàncies. Per si mateix, el balanç no el podem considerar negatiu.

Però on sorgeix el greuge comparatiu és quan considerem el que havia estat sempre la punta de la recerca, el professorat universitari que en feia i, al mateix temps, enriqueix la seva docència amb l'experiència investigadora, amb excavacions, treballs de laboratori, analítiques, tesis doctorals que tenien la conseqüència de la formació reglada i paral·lela de joves arqueòlegs, de persones que podien agafar un relleu generacional natural.

I és en el camp universitari on la Generalitat està fent una política activa que no afavoreix gens ni mica la recerca, permeteu-me aquesta frase tan rotunda. Els esforços per atreure talent investigador extern